



La consulta plantea si la actuación descrita en la misma constituye, una vulneración de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Se cuestiona, si las grabaciones de las conversaciones telefónicas del servicio de maquinistas de los trenes, tanto con el personal de circulación de las estaciones, como las conversaciones que mantengan ellos a nivel personal, implica una vulneración de los artículo 2,5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999.

En primer lugar conviene concretar el contenido de los artículos supuestamente infringidos. El artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, tan sólo describe el ámbito de actuación de la misma, estableciendo que “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptible de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos y privados”. Desde el punto de vista de la definición de datos de carácter personal, el artículo 3 a) de la citada Ley los define como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Quiero ello decir, que en aquellos supuestos que se traten datos de carácter personal, deberá de tenerse en cuenta los principios recogidos a lo largo del articulado de la citada Ley Orgánica.

Por su parte el artículo 5 de la Ley 15/1999, recoge el llamado deber de informar que establece que “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Este deber de informar, es exigible al empresario, para garantizar que los trabajadores conocen el tratamiento que se efectúa de sus datos personales. Si bien, del contenido de la consulta, se deduce que la Entidad, ha

ido comunicando de los sistemas que se iban a emplear para grabar las conversaciones por razones de seguridad. Así se hace constar en la Consigna C nº 21, de 25 de mayo de 2009, en la que en la que se establece que tiene como Objeto, “Registrar todas las comunicaciones” y en las Normas de Utilización se señala que “Las grabaciones no serán borradas.... y que el acceso a las grabaciones se realizarán para funciones de inspección, investigación de accidentes(..)”.

En virtud del contenido de la Consigna entendemos que se ha cumplido con el deber de informar a los trabajadores.

Dicho lo anterior, en relación con el tratamiento de datos, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica dispone que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Ley del Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de noviembre establece en su artículo 57 que “1. Con carácter previo a la prestación del servicio ferroviario sobre una determinada línea, las empresas ferroviarias deberán obtener el correspondiente certificado de seguridad.

2. El certificado de seguridad establecerá las condiciones que deben cumplir las empresas ferroviarias que presten un servicio de transporte ferroviario, en materia de gestión de la seguridad, de personal de conducción y acompañamiento y de material rodante, así como en cualesquiera otras materias que se determinen reglamentariamente.

Las empresas ferroviarias deberán respetar, en todo momento, las condiciones establecidas. El incumplimiento por las empresas ferroviarias de las condiciones previstas en el certificado de seguridad, determinará su revocación.

3. Para el otorgamiento del certificado de seguridad se exigirá a quien lo solicite la acreditación, de modo suficiente, de que el servicio correspondiente lo prestará adecuadamente, sin riesgos para las personas o para los bienes.

4. El certificado de seguridad, que permite prestar servicios sobre la Red Ferroviaria de Interés General, es un documento que emitirá el Ministerio de Fomento o, en su caso, el administrador de infraestructuras ferroviarias u otro ente facultado por aquél. Particularmente, en la medida en que así lo establezca la normativa comunitaria, se podrá prever, reglamentariamente, que el otorgamiento del certificado de seguridad se lleve a cabo por un ente u órgano administrativo habilitado al efecto.

5. Reglamentariamente, se determinará el contenido del certificado de seguridad que habrá de referirse, como mínimo, al sistema de control, de circulación y de seguridad ferroviaria, a los conocimientos y requisitos exigidos al personal de conducción, a las características técnicas del material rodante y a su mantenimiento, y al procedimiento para el otorgamiento de aquél, que deberá ajustarse a los principios de protección de los viajeros y las mercancías,

transparencia y no discriminación. Del mismo modo, se determinará el régimen para su renovación y revisión.”

El Reglamento de Seguridad en la Circulación de la Red Ferroviaria de Interés General aprobado por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio prevé en el Anexo V el Contenido esencial del informe de investigación sobre accidentes e incidentes donde se establece que existirá un Resumen que “contendrá una breve descripción del suceso, cuándo y dónde tuvo lugar y sus consecuencias. Indicará las causas directas así como los factores coadyuvantes y las causas subyacentes averiguadas por la investigación. Se citarán las recomendaciones principales y se proporcionará información sobre los destinatarios de dichas recomendaciones.”

Continúa señalando el apartado cuarto del Anexo V que se hará referencia al funcionamiento del material rodante ferroviario y de las instalaciones técnicas: “Infraestructura: Equipo de comunicaciones.

Material rodante, incluidas las grabaciones de los registradores automáticos de datos.”

Y en el apartado quinto alude a la documentación del sistema de gestión de la circulación: “Medidas tomadas por el personal de circulación.

Intercambio de mensajes verbales en relación con el suceso, incluida la documentación procedente de grabaciones.

Medidas destinadas a proteger y salvaguardar el lugar del suceso

Sistema de control de mando y señalización, incluidas las grabaciones de los registradores automáticos de datos.”

En consecuencia, la grabación de las conversaciones constituye una medida necesaria para garantizar la seguridad y para poder investigar los hechos que dieron lugar a cualquier tipo accidente o incidente. En definitiva el Reglamento de Seguridad concreta las medidas de seguridad ferroviaria a las que hace referencia la Ley del Sector Ferroviario, por lo que la grabación de dichas conversaciones se encuentra habilitada por una Ley.

A mayor abundamiento, si las grabaciones se efectuasen para controlar a los trabajadores, el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) dispone que *“El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”*.

Por otra parte, no se puede obviar la doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de junio de 2006 en virtud de la cual dichas medidas deben haber sido hechas constar expresamente al trabajador, pasando así a formar

parte de la propia relación laboral y siendo el tratamiento de los datos necesario para su adecuado desenvolvimiento.

De todo ello se desprende que la aplicación del artículo 20.3 ET legitima por sí solo el tratamiento de las imágenes, si bien éste será posible, aún sin contar con el consentimiento del afectado en caso de que el trabajador haya sido debidamente informado de la existencia de esta medida, debiendo además ser claro que, conforme a lo exigido por el artículo 4.2 LOPD, los datos no podrán ser utilizados para fines distintos para los que se recabaron.